

**EFRAÍN CEPEDA SARABIA**  
**SENADOR DE LA REPÚBLICA**  
**2022 - 2026**  
**PROPOSICIÓN ADITIVA**


Adiciónese un artículo nuevo el proyecto de Ley No. 102 de 2025 Cámara, 083 de 2025 Senado “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2026”, el cual quedará así:

**ARTICULO NUEVO. Operaciones de crédito, garantías de la Nación y destinación prioritaria de recursos del Fondo Empresarial.** Dentro de los primeros seis (6) meses de la vigencia 2026: (i) la Nación deberá adoptar medidas de financiamiento a favor del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, incluyendo créditos y garantías, los cuales podrán ser superiores a un año. No se requerirá la constitución de garantías ni contragarantías cuando la Nación otorgue estos créditos o garantías, y las operaciones estarán exentas de los aportes al Fondo de Contingencias creado por Ley 448 de 1998. Los términos para desarrollar estas autorizaciones se rigen por lo dispuesto en este Capítulo, y (ii) el referido Fondo Empresarial celebrará las operaciones pasivas de crédito, internas o externas, con entidades financieras públicas o privadas, nacionales o extranjeras, con el objeto de financiar a las empresas de servicios públicos domiciliarios que se encuentren bajo medida de toma de posesión, en cualquiera de sus modalidades, con el fin de garantizar la viabilidad, continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, conforme a lo previsto en el literal d) del artículo 247 de la Ley 1450 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y las demás normas que los modifiquen o adicionen. Para el otorgamiento de la garantía de la Nación en las operaciones de crédito del Fondo Empresarial única y exclusivamente se requerirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES sobre el otorgamiento de la garantía.
2. Concepto de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público respecto del otorgamiento de la garantía, cuando las operaciones se pacten a un plazo superior a un (1) año.

Autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la celebración del contrato de garantía. Los recursos provenientes de operaciones de crédito del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de subsidios del Gobierno Nacional o de cualquier otra fuente de financiamiento que esté asociada a recursos estatales que reciban las empresas de servicios públicos domiciliarios que se encuentren bajo medida de toma de posesión, deberán destinarse de manera prioritaria al pago de las obligaciones pendientes de pago con los generadores de energía y demás agentes del Mercado de Energía Mayorista, hasta por el monto total de dichas obligaciones.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en coordinación con el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC, establecerá los mecanismos de verificación, seguimiento y control que garanticen la destinación de los recursos conforme a lo previsto en el presente artículo.



**EFRAIN CEPEDA SARABIA**  
Senador de la República

**EFRAÍN CEPEDA SARABIA**  
**SENADOR DE LA REPÚBLICA**  
**2022 - 2026**

**Justificación:**

El Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios constituye el principal instrumento del Estado colombiano para atender la crisis de las empresas sometidas a toma de posesión. Su finalidad es garantizar la continuidad y eficiencia en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, ya sea en escenarios de administración temporal o de liquidación, evitando que el deterioro financiero de una empresa genere interrupciones masivas que afecten a los usuarios y al sistema en su conjunto.

Este Fondo se nutre de fuentes ordinarias como la tarifa establecida en la Ley 1955 de 2019, excedentes de la SSPD, CREG y CRA, ingresos por multas, rendimientos de recursos de terceros y recuperaciones de contratos. Sin embargo, la magnitud de procesos recientes ha puesto en evidencia que estas fuentes resultan insuficientes. El caso de Air-e lo ilustra con claridad: desde septiembre de 2024, el costo mensual de su operación asciende a cerca de \$318 mil millones, mientras que el déficit por obligaciones incumplidas en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) alcanza los \$205 mil millones mensuales. A la fecha, dicho déficit suma alrededor de \$1,97 billones, con deudas directas por \$1,49 billones y acuerdos incumplidos por \$480 mil millones.

Esta situación tiene su origen, entre otros factores, en la suspensión de la medida de limitación de suministro a empresas intervenidas y en la eliminación de la exigencia de garantías para su participación en el MEM. Tales decisiones trasladaron el riesgo financiero de una empresa particular al conjunto del sector eléctrico, afectando la capacidad de pago a generadores, transmisores y demás agentes, y generando un riesgo sistémico que compromete la confianza y estabilidad del mercado eléctrico.

Frente a este panorama, se hace indispensable ampliar la capacidad del Fondo Empresarial para acceder a recursos extraordinarios mediante operaciones de crédito respaldadas por la Nación. Para ello, la proposición plantea simplificar los requisitos aplicables a la garantía de la Nación, eliminando la exigencia de contragarantías al propio Fondo, el análisis de capacidad de pago y cualquier requisito incompatible con su naturaleza. En su lugar, se establecen tres filtros institucionales de alto nivel: (i) concepto favorable del CONPES, (ii) concepto de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público cuando se trate de operaciones a más de un año, y (iii) autorización expresa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Con este esquema se asegura la necesaria validación técnica y fiscal de las operaciones, sin introducir cargas que dilaten el acceso a los recursos en contextos de urgencia. Al mismo tiempo, se establece la obligación de que los recursos que reciban las empresas intervenidas se destinen, de manera prioritaria, al pago de las obligaciones en el MEM. Así se evita que los dineros públicos se diluyan en gastos secundarios y se garantiza que cumplan la finalidad de preservar la estabilidad del mercado y la continuidad del servicio.

En conclusión, esta proposición fortalece al Estado en su capacidad de respuesta frente a crisis empresariales en el sector de servicios públicos, preserva la disciplina fiscal y asegura la estabilidad financiera del sistema eléctrico colombiano, protegiendo tanto a los agentes del mercado como a los millones de usuarios que dependen del servicio.